



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

FAO en América del Sur: hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible Grandes resultados 2012-2016

FAO en América del Sur: haciendo la diferencia

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura trabaja codo a codo con los diez países de América del Sur para mejorar su seguridad alimentaria y nutricional y erradicar el hambre y la malnutrición.

En seis de estos países, la FAO lleva ya más de cuarenta años de presencia, y a lo largo de todo ese tiempo ha apoyado los esfuerzos que le permitieron a América del Sur rescatar a millones de personas del hambre.

Amse ha convertido en un actor clave en la seguridad alimentaria y en el comercio mundial de alimentos. Sus países concentran más del ochenta por ciento de la superficie de América Latina y el Caribe, y en las últimas décadas han impulsado el desarrollo de su agricultura, bosques, ganadería y pesca hasta convertirse en una potencia agrícola y una gran exportadora y productora neta de alimentos.

Mediante cooperación técnica, trabajo en terreno, diálogos de políticas, asesorías y generación de conocimiento, la FAO ha ayudado a los países de América del Sur a dar un salto adelante en términos de su desarrollo agrícola, social y económico, reduciendo la pobreza y alcanzando logros sanitarios como la eliminación casi total de algunas enfermedades animales como la fiebre aftosa.

El presente documento presenta una selección de los grandes resultados del programa de trabajo de la FAO en apoyo a sus Estados Miembros de América del Sur, en el periodo 2012 – 2016.

Estas labores incluyen el impulso a la agricultura familiar en Perú, el apoyo al proceso de Paz de Colombia, la reducción de las pérdidas y los desperdicios de alimentos en Argentina, el impulso de la cooperación triangular con Brasil y el combate contra la obesidad en Chile.

También se detalla el desarrollo rural inclusivo en Bolivia, el impulso del Frente Parlamentario contra el Hambre en Ecuador, la superación de la pobreza en Paraguay, la lucha contra el cambio climático en Uruguay y el apoyo a los movimientos sociales en Venezuela.

Juntas, constituyen un testimonio vivo del compromiso de los países de América del Sur con la lucha contra el hambre y su estrecha relación con la FAO, que los acompaña paso a paso para caminar juntos hacia un futuro sin hambre ni malnutrición.

Cooperación Sur-Sur: una región que lucha unida

La FAO ha apoyado a los países de América del Sur para impulsar una gran variedad de proyectos de Cooperación Sur-Sur, que han permitido a los países compartir sus experiencias y aunar esfuerzos para impulsar su desarrollo conjunto.

Países como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay han sido pioneros en compartir sus experiencias y conocimientos, fomentando la solidaridad, la integración regional y la generación de bienes públicos.

Como facilitador y promotor de la Cooperación Sur-Sur, la FAO apoya este intercambio de conocimientos, especialmente entre instituciones públicas, permitiendo que la vasta experiencia acumulada por los países en términos de políticas, programas, buenas prácticas, metodologías y tecnologías se compartan para el bien de todos.

La FAO ha trabajado con el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) para fortalecer los sistemas de gestión integral de riesgos, fomentando el intercambio de conocimientos, mediante la cooperación sur-sur y triangular.



Argentina: reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos con el compromiso de múltiples sectores



En la Argentina las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) se estiman en un 12,5 por ciento de la producción agroalimentaria, alrededor de 16 millones de toneladas.

Para acabar con este enorme despilfarro, la FAO colaboró con el gobierno para aumentar la conciencia pública sobre este tema, apoyando el diseño de una metodología nacional para la estimación de los desperdicios de alimentos en las etapas de distribución y comercio minorista, y consumo de hogares, cuyos resultados motivaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a implementar una política alimentaria urbana sostenible, iniciando un diagnóstico del desperdicio de alimentos en el consumo en hogares, con el apoyo técnico de la FAO.

FAO también trabajó con el gobierno para establecer el *Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos* de Argentina creado en 2015 y liderado por el Ministerio de Agroindustria, con más de cincuenta instituciones adheridas. A eso se sumó la *Red Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos*, como espacio de

intercambio y articulación multilateral entre actores nacionales públicos y privados.

En el eje de comunicación, FAO ha cooperado con diversas instituciones para llevar a cabo la campaña *Valoremos Los Alimentos* a través de diferentes canales. Junto al sector privado, FAO desarrolló la campaña *#NoTiresComida*, trabajando con Unilever, Carrefour, el Ministerio de Agroindustria, la cual consiguió una cobertura mediática exitosa en revistas, diarios y televisión.

Asimismo, FAO y sus socios han impulsado acciones legislativas para combatir este fenómeno, una de las cuales fue la presentación al Congreso Nacional de un proyecto de Ley Nacional para declarar el 29 de septiembre como *Día Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos*.

La institucionalización del abordaje de las pérdidas y desperdicios de alimentos en Argentina se ha convertido en un modelo para otros países de la región. En pocos años, Argentina se ha convertido en un socio estratégico de la FAO en esta temática, apoyando el desarrollo de un código de conducta para las pérdidas y desperdicios de alimentos.



Bolivia: Desarrollo territorial rural inclusivo, resiliente y sostenible



La FAO en Bolivia ha consolidado una metodología para establecer políticas públicas de soberanía alimentaria en los territorios del país. Mediante un enfoque multisectorial se busca el desarrollo de la agricultura familiar campesina y la economía social comunitaria de los pueblos indígenas, así como la reducción de la pobreza e inseguridad alimentaria.

Entre 2013 y 2016, este modo de articulación de proyectos y programas, ha sido implementado en seis territorios del país y 31 municipios, en los cuales prevalecen sistemas y modos de vida campesinos e indígenas.

Los denominados *Territorios de Soberanía Alimentaria* incluyen el altiplano sur, los valles andinos, el altiplano norte, la Amazonia y también múltiples regiones urbanas. Aplicando el marco legal vigente, la metodología permite apalancar el financiamiento público y fortalecer la participación y control social en los municipios en situación de pobreza.

En los últimos cuatro años, se han beneficiado directamente a más de 351 mil personas, 123 organizaciones económicas comunitarias y 51

asociaciones de productores en 166 municipios de los nueve departamentos del país.

En los *Territorios de Soberanía Alimentaria* la FAO aporta asistencia técnica a familias y sus organizaciones, fortaleciendo las instituciones del Estado. En las Unidades Técnicas Operativas de FAO en terreno, un equipo técnico de jóvenes - mayormente hijos de los campesinos egresados de las universidades públicas - brindan asistencia técnica hasta que este método pueda ser gestionado por los gobiernos locales. Otro aspecto determinante ha sido la participación y el control social de los actores locales.

El gobierno ha replicado este tipo de iniciativas, implementando un *Territorio de Referencia del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC*, en cuatro municipios del Altiplano Norte, con la cooperación técnica de la FAO y aportes financieros de los gobiernos municipales.

En estos territorios, se apoya a las familias y comunidades a proteger y diversificar sus medios de vida mediante acceso a tecnologías para la producción ecológica y para enfrentar los efectos del cambio climático.

Esta labor, junto a la asistencia técnica jurídica y organizacional, ha impulsado a las organizaciones económicas en su transformación y comercialización, permitiendo que organizaciones de mujeres campesinas logren implementar plantas de transformación de sus productos para la alimentación escolar y articular sus ventas a través de las compras públicas municipales.



Brasil: cooperación triangular con la FAO permite extender una mano al resto del mundo



© Ueslei Marcelino

En un contexto internacional marcado por cambios sin precedentes en la arquitectura de asistencia al desarrollo internacional, Brasil está desarrollando nuevos modelos de cooperación internacional para países emergentes de ingreso medio y alto.

Actualmente, la FAO y el gobierno de Brasil cooperan con más de veinte países latinoamericanos y africanos en modalidad trilateral para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible e impulsar sus prioridades nacionales de desarrollo.

Estas alianzas tripartitas son innovadoras, puesto que amplían los impactos de la cooperación, agregando valor al integrar los aportes técnicos, humanos, materiales y financieros de los actores involucrados. Las contrapartes trabajan alrededor de un objetivo común, con responsabilidades y gobernanza compartidas, basados en la igualdad y en el entendimiento de que todos tienen algo que enseñar y algo que aprender.

A la fecha, la colaboración ejecutada por Brasil y la FAO con otros países ha movilizó cerca de US\$ 50 millones de dólares en aporte del

gobierno brasileño. Las labores de cooperación se desarrollan en ámbitos como el derecho humano a la alimentación, la tenencia de tierra y agua, el desarrollo rural y agrícola, y la resiliencia ante riesgos naturales y emergencias humanitarias.

El Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO ha contribuido a la institucionalización de programas de alimentación escolar y políticas nacionales y subregionales de seguridad alimentaria y nutricional. Además, trabaja para crear directrices regionales de políticas agroambientales, modelos de compras públicas de alimentos a la agricultura familiar e instrumentos de políticas de pesca y acuicultura.

También se ha apoyado el desarrollo de capacidades para el diálogo y diseño participativo de políticas públicas, la gestión de las emergencias, y el fortalecimiento de las cadenas de valor algodoneras.



Chile: una política alimentaria y nutricional para combatir la obesidad



Chile fue uno de los países que mayores logros alcanzó en la lucha contra el hambre a nivel regional. Gracias a políticas de Estado, logró disminuir la desnutrición infantil y bajar la subalimentación a menos del 5 por ciento de su población.

Sin embargo, en los últimos años ha visto un aumento serio de la malnutrición por exceso: hoy ocupa los primeros lugares de América del Sur en términos de sobrepeso y obesidad en niños y adultos. Según datos de la última encuesta de consumo alimentario, la prevalencia de obesidad y sobrepeso llega al 70 por ciento en adultos, al 47 por ciento en escolares y al 27 por ciento de preescolares.

Para cambiar esta situación, la FAO y la Organización Panamericana de la Salud, OPS,

apoyaron a Chile en la creación de su Ley de Alimentos, la cual ha sido alabada a nivel mundial como una ley innovadora y pionera.

Esta ley comprende tres mecanismos obligatorios claves para la prevención de la obesidad y sobrepeso: el etiquetado frontal de advertencia para productos que superen límites establecidos de elementos críticos para la salud (azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías); la prohibición de la venta de productos etiquetados en escuelas; y la prohibición de su publicidad a menores de catorce años. Esta ley entró en vigencia en junio del 2016 y se ha convertido en un referente regional.

La segunda iniciativa en que la FAO y la Organización Panamericana de la Salud OPS colaboran con Chile es el plan Contrapeso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Este plan busca combatir la obesidad infantil y cubre cincuenta medidas concretas hacia una alimentación saludable, educación de hábitos saludables y promoción de actividad física.

En las medidas del plan, se destaca la incorporación de alimentos locales por medio de compras públicas a agricultores, y el desarrollo de huertos escolares y caseros. Este plan comenzó a planificarse en marzo del año 2016 y su implementación se dio inicio en marzo del año 2017.

La FAO ha tenido un rol catalizador en estas iniciativas, apoyando el diálogo nacional sobre alimentación saludable, brindando asistencia técnica y difundiendo los avances del país en la región de América Latina y el Caribe.



Colombia: sembrar paz y cosechar desarrollo



Luego de cincuenta años en conflicto, en 2016 el Gobierno colombiano firmó un acuerdo histórico con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sentando las bases para iniciar la construcción de la paz. El acuerdo incluye una profunda transformación del campo y la creación de condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural; disminuyendo la pobreza, promoviendo la equidad y el desarrollo de la agricultura familiar campesina.

La experiencia de la FAO fue fundamental para que las partes le solicitaran a la Organización acompañar la implementación del Punto Uno del Acuerdo de Paz: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, junto con la Unión Europea y Vía Campesina.

En respuesta a ello, la FAO actualmente acompaña al Gobierno en aspectos como la democratización del acceso y uso de la tierra, el desarrollo de programas de desarrollo con enfoque territorial y la planificación y ejecución de planes nacionales para la reforma rural integral.

La prioridad en el corto plazo es proporcionar alternativas productivas viables que generen ingresos y medios de vida estables en las zonas rurales afectadas por décadas de conflicto, desplazamientos forzosos y violencia armada, promoviendo el arraigo, la cohesión social y el desarrollo territorial. Para ello, la FAO cuenta con equipos multidisciplinares en varias de las zonas afectadas por el conflicto (Nariño, Putumayo, Chocó, Córdoba, Guaviare), que apoyan la transición a una mayor presencia de las instituciones del estado en dichas zonas.



Ecuador: Frente Parlamentario contra el Hambre



En el marco del acompañamiento técnico que brinda la FAO en Ecuador, en 2011 la Organización apoyó al país en la construcción de su Frente Parlamentario contra el Hambre.

El actual Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre (FPESH) está conformado por 40 legisladores de diferentes bancadas políticas, quienes trabajarán durante el periodo 2017-2020, constituyendo un espacio de diálogo que promueve marcos legales, políticas públicas y presupuestos orientados a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población ecuatoriana.

Esta iniciativa demuestra el compromiso del país en posicionar la seguridad alimentaria y nutricional en lo más alto de su agenda legislativa y política, proceso que recibe el apoyo continuo de la FAO.

El Frente Parlamentario Sin Hambre de Ecuador ha impulsado una serie de legislaciones claves para la seguridad alimentaria, como las

leyes orgánicas de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, y los reglamentos de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano y el de Control de Funcionamiento de Bares Escolares.

Además de esas iniciativas, el Frente ha presentado los proyectos de ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico y de Alimentación Escolar, postulando la declaración del 16 de octubre como Día Nacional de la Soberanía Alimentaria.



Paraguay: políticas para superar la pobreza



FAO trabaja con el Gobierno de Paraguay para construir múltiples instrumentos y normativas legales a fin de asegurar y garantizar la implementación de políticas públicas que permitan reducir la pobreza y el hambre.

La colaboración de la FAO con el gobierno ha generado importantes resultados, como la implementación de la Ley y reglamentación de Alimentación Escolar y Control Sanitario, que fue liderada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y que convirtió al Programa de Alimentación Escolar de Paraguay en una política de Estado.

La cobertura nacional del servicio de alimentación escolar abarca a más de un millón de estudiantes, de los cuales el 75 por ciento recibe un servicio de desayuno y merienda escolar, mientras que el 29 por ciento recibe un almuerzo escolar.

La FAO también apoya a Paraguay a fortalecer sus mecanismos de protección social con un

enfoque de articulación, para impulsar el desarrollo del sector rural y fomentar la inclusión social productiva. Con acompañamiento de la FAO, Paraguay promulgó un decreto que apoya la aplicación de la estrategia de producción rural inclusiva coordinada por una mesa interinstitucional entre la Secretaría de Acción Social y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La FAO también colaboró en la implementación de la metodología, la recolección de datos y la evaluación del Inventario Forestal Nacional. Además, contribuyó al proceso de validación y presentación del anteproyecto que acabó creando la ley que estableció la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, normativa que incorpora los valores tradicionales y medicinales de los 19 pueblos indígenas del país.



Perú: agricultura familiar más fuerte gracias a políticas públicas focalizadas



© FAO

En el Perú, el 75 por ciento de los alimentos frescos son producidos por agricultores familiares. Se trata de más de dos millones de personas que representan cerca del 90 por ciento de los productores agrícolas del país. Sin embargo, a pesar de su importancia, este sector enfrenta serios desafíos, y la pobreza afecta al 45 por ciento de la población rural del país.

Durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar, la FAO apoyó al país a impulsar esfuerzos multisectoriales para diseñar e implementar una política pública de promoción de la agricultura familiar, que orientara y organizara la intervención integral del Estado a favor de este sector.

La intensa colaboración de la FAO con el gobierno peruano para la inclusión social y económica de la población rural, permitió alcanzar importantes logros. Uno de ellos fue la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, que promueve el acceso oportuno, equitativo y de calidad a factores de producción, mercados, asistencia técnica y bienes públicos.

Otro fue la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, promovida en el Congreso por los miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre de Perú en 2015, cuyo

reglamento fue diseñado de forma participativa y descentralizada con actores del sector agropecuario.

El Plan Nacional de Agricultura Familiar, formulado multisectorialmente, identifica líneas concretas de acción, fija metas e indicadores de seguimiento y evaluación y establece recursos presupuestarios multianuales hacia el 2021, mientras que la Estrategia Nacional de Promoción y Gestión de Talentos Rurales para la Agricultura Familiar apunta a revertir la situación del 90 por ciento de agricultores que no tenían acceso a la asistencia técnica.

El apoyo de la FAO en la construcción de estas políticas públicas ha implicado un abordaje complementario de asistencia técnica y fortalecimiento institucional, que ha permitido fomentar el trabajo intersectorial, territorial y con los movimientos sociales, labor que ha fortalecido la agricultura familiar e impulsado el desarrollo rural.



Uruguay: enfrenta el cambio climático en el sector agropecuario



El 70 por ciento de las exportaciones de Uruguay son exportaciones agropecuarias, por lo que el impacto del cambio climático en el sector es una cuestión de importancia nacional.

En 2009, el Gobierno creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Vulnerabilidad y elaboró un Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Desde el 2010, la FAO ha colaborado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para generar información y fortalecer las capacidades nacionales para formular políticas de adaptación al cambio climático en la agricultura.

La asistencia técnica de la FAO apoyó la caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas uruguayos a los efectos del cambio climático y la formulación de un conjunto articulado

de medidas de respuesta. El apoyo de la FAO permitió articular acciones con la participación del sector privado, definiendo las principales políticas e instrumentos a aplicar para la adaptación de diversas actividades agropecuarias y cultivos como cereales y oleaginosos, carne y lana, lechería, fruticultura y arroz.

En específico, la FAO ha colaborado con el país en la gestión sostenible de los recursos naturales y el cambio climático a través de un proyecto conjunto con el Banco Mundial. Además, apoyó la elaboración del Plan Nacional de Adaptación para el sector agrícola, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Por último, trabajó con el gobierno para impulsar la mitigación de gases de efecto invernadero mediante la restauración de tierras degradadas, a través de prácticas ganaderas climáticamente inteligentes, a través de un proyecto financiado por el Fondo para el Medioambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

Recientemente, el Gobierno de Uruguay, a través del Ministerio de Agricultura, ha solicitado a la FAO asistencia técnica para la elaboración de un proyecto a ser presentado al Fondo Verde para el Clima, para avanzar en un cambio sustancial de las prácticas ganaderas del país.



Venezuela: apoyo a las organizaciones y movimientos sociales en seguridad y soberanía alimentaria



A partir del año 2015, la República Bolivariana de Venezuela y la FAO dieron inicio al Programa Regional de Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe (SANA), como parte de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre (IALCSH).

Mediante SANA, Venezuela movilizó recursos y Cooperación Sur – Sur para asegurar el derecho humano a la alimentación. El programa apoyó a 141 movimientos y organizaciones sociales de 26 países en los ámbitos de seguridad y soberanía alimentaria, trabajando con miembros de la agricultura familiar, campesina, indígena, urbana y periurbana, y formando a cerca de trescientos líderes sociales.

Recientemente, SANA ha apoyado un proyecto para la producción y transformación de semillas en Venezuela con apoyo de la *Cooperativa Central da Reforma Agrária Terra Livre* de Brasil. Este proyecto desarrollará áreas de producción, empaquetado y distribución de semillas de hortalizas y frijoles negros en centros demostrativos de capacitación. Las semillas serán destinadas al Plan de Siembra Comunal y al Programa de Agricultura Urbana y Periurbana de Venezuela, beneficiando a más de seis mil productores urbanos.



